

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA TERCERA DE DECISION LABORAL**

<b>PROCESO</b>	ORDINARIO
<b>DEMANDANTE</b>	Luis Eduardo Bojaca González
<b>DEMANDADOS</b>	AFP Protección y Colpensiones
<b>PROCEDENCIA</b>	Juzgado 019 Laboral del Circuito de Medellín
<b>RADICADO</b>	05001 3105 <b>019 2022 00103</b> 01
<b>INSTANCIA</b>	Segunda
<b>PROVIDENCIA</b>	Sentencia Nro. 273 de 2022
<b>TEMAS Y SUBTEMAS</b>	Ineficacia de traslado
<b>DECISIÓN</b>	Revoca parcialmente para incluir en restituciones los gastos de administración completos, relación de conceptos y termino

En la fecha, **siete (07) de diciembre de dos mil veintidós (2022)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza, y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de **Colpensiones**, así como el grado jurisdiccional de consulta para la misma entidad, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Luis Eduardo Bojaca González**, en contra de esta y de la **AFP Protección S.A.** Radicado único nacional 05001 3105 **019 2022 00103** 01.

**Auto**

Con fundamento en la documentación allegada a esta instancia, se reconoce personería al abogado **Didier Andrés Mesa Mora**, para asumir la representación judicial de Colpensiones.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado en sala virtual, mediante acta **Nº37**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

### **Antecedentes**

Se orientan las pretensiones del demandante a obtener la declaratoria de ineficacia del traslado efectuado del RPMPD al RAIS, a través de la AFP Protección S.A., **a partir del 1º de junio de 1995**, por haberse faltado al deber objetivo de información en detrimento de sus intereses, y como consecuencia, se ordene a la AFP, *transfiera el saldo de su cuenta individual, incluidos los rendimientos y cuotas de administración* a Colpensiones. Solicita también condena en costas.

En sustento de ello afirma que, **nació el 13 de marzo de 1962**, se afilió por primera vez al sistema pensional, ISS hoy Colpensiones, a partir del **02 de diciembre de 1983**, efectuando cotizaciones hasta el 30 de mayo de 1995, acumulando **540 semanas; a partir del 1º de junio de 1995 se trasladó al RAIS – AFP Protección S.A.**, sufragando a esta entidad **1336,4 semanas**, para un total de **1.876,4**. El 21 de febrero de 2014, estando dentro del término para el retorno al RPM, se le efectuó por la AFP reasesoría, informándole que en el RAIS tendría derecho a mesada equivalente al 80% de su IBL y en Colpensiones del 79,37 del IBL, siendo más favorable en el fondo privado. Con escrito del 27 de diciembre de 2021 se le realizó nueva proyección de mesada, con una fidelidad del 100% a la edad de 62 años en el RAIS \$1.144.857, mientras que efectuados los cálculos en el RPM recibiría una suma aproximada de **\$2.298.906**. El 09 de marzo de 2022 radicó ante Colpensiones documentación para traslado de régimen, resuelta de manera desfavorable

por encontrarse a menos de diez años de la edad para pensión. Que al momento de su vinculación a la AFP privada, *no le proporcionó una suficiente, veraz, completa y clara información sobre las diferencias entre ambos regímenes, y las reales implicaciones que le conllevaría el traslado, con sus consecuencias futuras, viendo defraudada su expectativa pensional,* confiando siempre en que recibiría de Protección una mesada acorde a sus aportes y a las expectativas que le fueron creadas.

En auto del **16 de marzo de 2022**, se admitió y ordenó dar trámite a la acción, debidamente enteradas de la actuación, las entidades vinculadas por pasiva allegaron escritos de contestación así:

**Colpensiones**, de los hechos tiene como ciertos, la fecha de nacimiento del demandante, la de afiliación al RPMPD a través del ISS, la solicitud de retorno al régimen público con fecha 09 de marzo de 2022. Los demás supuestos no le constan. Manifestó **oposición** a las pretensiones, expuso las razones y fundamentos de derecho y propuso **las excepciones** de inexistencia de la obligación y falta de derecho para pedir, buena fe de la entidad, imposibilidad de decretar administrativamente la ineficacia del traslado, improcedencia de la declaratoria de invalidez del traslado, presunción de legalidad de los actos jurídicos, falta de legitimación en la causa por pasiva, imposibilidad de condena en costas, equilibrio financiero del sistema, prescripción, compensación y las demás que resulten probadas.

**AFP Protección S.A.**, acepta como cierta la fecha de nacimiento del demandante, la de vinculación a esa AFP, 03 de mayo de 1995, como traslado del RPM al RAIS, *mediante formulario suscrito de manera LIBRE, ESPONTANEA Y SIN PRESIONES, precedida de una asesoría adecuada, correcta y suficiente por mi representada, afiliación que constituyó un acto jurídico válido que produjo efectos hasta el momento en que nuevamente de manera voluntaria y con pleno conocimiento realiza un sin número de traslados con diferentes Administradoras*

*del RAIS, por lo que se dio en estricto cumplimiento de la normativa vigente en los arts. 13 y 271 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 692 de 1994, decisión que quedó plasmada en el formulario de afiliación del actor a esta entidad, donde manifestó que realizó dicho acto jurídico de manera libre y voluntaria, formulario que cumple los requisitos del Decreto 692 de 1994 y constituye un acto jurídico plenamente valido y eficaz; el número de semanas aportadas a la AFP es cierto, también es cierta la reasesoría y las proyecciones efectuadas tanto en ese momento como la del 21 de diciembre de 2021. Los demás supuestos no son ciertos o no le constan. Explica que desde el momento de la afiliación se le anunciaron al afiliado de manera clara todas las características del RAIS, principalmente que la pensión se construye a través de un ahorro en una cuenta individual en la que se depositan los aportes, y a partir de ello se define la mesada, teniendo en cuenta el capital (aportes obligatorios, voluntarios y rendimientos financieros), bono pensional y su valor, edad de retiro, composición del grupo familiar (beneficiarios) expectativa de vida según tabla de mortalidad de rentistas, factor actuarial, regulación de la Superintendencia Financiera y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para liquidación; y además *el actor fue informado de manera OBJETIVA e INTEGRAL sobre todas las características del RAIS en comparación con el RPM, señalándole diferencias o aspectos comparativos, como cuenta de ahorro individual – vs- fondo común; capital acumulado –vs- requisitos de edad y semanas de cotización; garantía de pensión mínima en el RAIS, devolución de saldos vs. indemnización sustitutiva.* **Resistió** las pretensiones, expuso los fundamentos de derecho y razones de su defensa y formuló las **excepciones** de: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones; reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP y dentro de esta, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y el porcentaje aplicado a seguros previsionales cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y la innominada o genérica.*

La primera instancia terminó con **sentencia** proferida el **08 de noviembre del año en curso**, por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito, declarando ineficaz el traslado del demandante al RAIS, teniéndolo para efectos pensionales siempre afiliado al RPMPMD, en garantía de la libre escogencia de régimen pensional, ordenando a Colpensiones, aceptar su regreso o vinculación, y a la AFP Protección S.A., trasladar todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, como cotizaciones obligatorias, rendimientos, gastos de administración y comisiones, **sin incluir los valores destinados a pago de seguros previsionales**, debiendo Colpensiones recibirlos, para que su equivalente en semanas se refleje en la historia laboral. Absolvió de las demás pretensiones, e impuso condena en costas a la AFP Protección S.A., fijando el monto de las agencias en derecho.

El juzgador de primer grado, luego de hacer referencia a los puntos decantados por la jurisprudencia especializada sobre el tema, y al contenido del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, determinó que al no haberse acreditado probatoriamente por parte de la AFP a la cual estuvo afiliado el actor, el cumplimiento del deber de información que le asistía, sin que el formulario satisfaga dicha obligación, al dar cuenta solo del acto formal, el traslado de régimen pensional no podía considerarse precedido de una real manifestación de voluntad, siendo entonces ineficaz, entendiéndose que permanece afiliado al RPMPD, correspondiéndole a Colpensiones, aceptar el regreso o la vinculación, y a Protección S.A., devolver todos los valores recibidos, esto es, los aportes, cotizaciones obligatorias, rendimientos, gastos de administración, y comisiones, **sin incluir los valores destinados al pago de seguros previsionales**, al entrar en juego un tercero de buena fe, que no tuvo participación en el acto jurídico que se declara ineficaz, que no puede verse afectado en virtud de la sentencia y que brindó cobertura a los riesgos de invalidez y

sobrevivencia.

Inconforme parcialmente con la anterior decisión, el apoderado de **Colpensiones interpuso recurso de apelación**, en cuanto no se incluyó la devolución de los dineros correspondientes a los aportes para la garantía de pensión mínima, pues la restitución de la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, ya que los recursos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante, lo que incluye el retorno de las de cuotas de administración, comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de estos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

De la etapa de **alegaciones ante esta instancia** hizo uso el apoderado judicial de Colpensiones, expresando que el alcance de la asesoría que debió brindarse por parte de la AFP a la demandante debe ser valorada bajo la normatividad vigente para la fecha de suscripción del formulario o materialización del traslado, pues no es razonable, ni jurídicamente válido, imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente, ya que con tal exigencia se desvirtúa el principio de confianza legítima, exigiéndose además por el artículo 29 Superior que el acto se ajuste a las normas pre existentes al acto que se juzga. Para el profesional el juzgamiento de la conducta de los fondos con base en normas inexistentes no tiene justificación jurídica alguna y viola gravemente el debido proceso de Colpensiones, quien sin haber participado en el trámite de traslado es quien debe afrontar la carga de la prestación; y tampoco es admisible desestimar como medio probatorio el único documento exigido que era el formulario de afiliación, estándose ante un traslado realizado voluntariamente como se verifica del escrito de demanda, gozando tal acto de plena validez.

Luego de citar aparte de la sentencia SU062 de 2010, indica que permitir a una persona próxima a la edad de pensión beneficiarse y subsidiarse de las cotizaciones de los demás, resulta contrario no solo al precepto constitucional de la equidad sino también al principio de eficiencia pensional, y precisa que al ser Colpensiones una entidad pública no puede ir más allá de la Ley, haciendo alusión a la prohibición para la movilidad entre regímenes frente a quienes se encuentren a menos de diez años de la edad para pensión, puntualizado que no se le pueden imponer a Colpensiones cargas económicas adicionales, cuando en virtud de la Ley 100 los afiliados contaban con un espectro de decisión más amplio a la hora de definir su situación ante el sistema, advirtiendo que al no encontrarse la señora Ortega Bedoya afiliada a Colpensiones, no es procedente el reconocimiento del traslado e incorporación en RMP y no le es dable tampoco invocar vicio alguno en el consentimiento al momento del traslado al RAIS.

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones:**

Como hechos debidamente acreditados se tienen: la fecha de nacimiento del demandante, **13 de marzo de 1962**; su afiliación al RPMPD antes administrado por el ISS, hoy por Colpensiones, con empleadores privados, el 02 de diciembre de 1983, efectuando cotizaciones por un total de 540 semanas. Con formulario diligenciado el **03 de mayo de 1995 se trasladó a la AFP Protección S.A., con efectividad a partir del 01 de junio del mismo año.** En formato de reasesoría del 21 de febrero de 2014, se consignó que el porcentaje del IBL en Protección sería del 80% y en Colpensiones del 79,37%. **En historia laboral generada el 28 de marzo de 2022,** acumula un total de **1.906 semanas,** (540 en otro

régimen, válidas para bono pensional con fecha de redención 13 de marzo de 2024 y 1.366,43 directamente a Protección).

Teniendo en cuenta lo decidido por el a quo, el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si con ocasión de la declaratoria de ineficacia de la movilidad de régimen pensional del demandante hay lugar a ordenar su retorno al RPMPD, en caso afirmativo que conceptos se deben restituir.

Pues bien, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con pronunciamientos sostenidos en línea mayoritaria desde el año 2008, tiene decantado que para que se pueda predicar la selección libre y voluntaria de régimen pensional, se debe efectuar por **el fondo privado** el análisis de la situación particular de cada afiliado frente al sistema y cumplirse con el deber de información y asesoría previos, deber de información que evolucionó al de asesoría y buen consejo y actualmente a la doble asesoría, siendo la sanción aplicada inicialmente la de nulidad (ver sentencias 31989 y 31314 de 2008, 33083 de 2011), y a partir de 2014, modificada para hablarse de ineficacia en los términos de los artículos 13 y 271 de la Ley 100 de 1993 (ver entre otras sentencias SL12136 de 2014, SL 17595 y SL 19447 de 2017, SL 4964 y SL 4989 de 2018; SL 1421, SL 1452 y SL 1688 de 2019), quedando definido en tales pronunciamientos la inversión de la carga de la prueba por las negaciones indefinidas que se hacen en los escritos de demanda (art. 167 del C.G. del P.), y porque en los términos del artículo 1604 del C. Civil la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, deber de información regulado desde el Decreto 663 de 1993 – Estatuto Financiero, Decreto 720 de 1994, en la Ley 795 de 2003, Ley 1328 de 2009, Decreto 2241 de 2010 y más recientemente Ley 1748 de 2014, Decreto 2071 de 2015 y Circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera.



Sobre el tema, en sentencia SL2929-2022, se explica:

**1.** *El deber de las AFP de suministrar a sus potenciales afiliados información objetiva, comparada y transparente sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, existía desde la creación del sistema de seguridad social integral, como de ello da cuenta el artículo 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, en armonía con el artículo 13, literal b) de la Ley 100 de 1993 (CSJ: SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL4426-2019, SL3464-2019, SL4360-2019, SL2611-2020, SL4806-2020 y SL373-2021).*

**2.** *En estos asuntos la carga de la prueba corre por cuenta de las AFP, toda vez que: (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación<sup>1</sup>; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento, y (iii) no es razonable invertir la carga de la prueba en contra de la otra parte de la relación contractual, ya que las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia frente al afiliado lego (CSJ: SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019 y SL4426-2019).*

**3.** *La suscripción del formulario de inscripción por parte del afiliado o porque en el mismo se utilicen leyendas o afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares, no libran a las AFP de su obligación de brindar información completa, objetiva y comparada de los distintos regímenes pensionales y las consecuencias asociadas al traslado entre ellos. A lo sumo, estas expresiones sirven para acreditar un consentimiento sin vicios, pero no uno debidamente informado (CSJ: SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020).*

Y la Corte Constitucional en sentencia T 191 de 2020, enseña:

**88. La libertad de elección presupone conocimiento<sup>2</sup> de los regímenes pensionales, así como de las consecuencias que implica la elección<sup>3</sup>. Este conocimiento, a su vez, se rige por el principio de la información, el cual vincula al empleador al momento de enganchar al trabajador<sup>4</sup>, así como a la administradora de fondos de pensiones, al momento de afiliarse o trasladarse.**

<sup>1</sup> En tal sentido, el artículo 1604 del Código Civil establece que «la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo», de lo que se sigue que es al fondo de pensiones al que corresponde acreditar la realización de todas las actuaciones necesarias a fin de que el afiliado conociera las implicaciones del traslado de régimen pensional.

<sup>2</sup> C. Sup. Jus., SL 1688-2019, p. 16.

<sup>3</sup> C. Sup. Jus., SL 1688-2019, p. 16.

<sup>4</sup> C. Sup. Jus., SL 19447-2019, p. 18.

89. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha derivado este principio del artículo 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 3 literal c) de la Ley 1328 de 2009 y ha indicado que **las administradoras de fondos de pensiones tienen la obligación de brindar asesoría seria y concreta, conforme con un análisis o estudio previo de la posición, la condición y la situación fáctica del afiliado<sup>5</sup>. Esta información tiene como finalidad permitirle a los afiliados o usuarios del sistema pensional a adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional<sup>6</sup>, así como las ventajas y desventajas de la elección<sup>7</sup>.**

90. El principio de información se concreta, a su vez, en las siguientes obligaciones<sup>8</sup>: a) se debe suministrar información y asesoría a través de un lenguaje claro, simple y comprensible, y; b) debe darse a conocer toda la verdad objetiva –y comparada– de los regímenes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar lo malo y parcializar lo neutro.

91. La Corte Suprema de Justicia entiende que la justificación de este principio se encuentra en que la Ley 100 de 1993 reconoce dos regímenes pensionales, en los que podía presentarse asimetrías en la información<sup>9</sup>, sobre todo en las administradoras de fondos de pensiones, y, por tanto, se hacía necesario consagrar unas consecuencias a éstas, para reconocer así la trascendencia de un cambio de régimen<sup>10</sup>.

92. Si la persona fue asesorada y conoce las ventajas y desventajas de un régimen pensional, la elección –el traslado– de éste se regirá por unas reglas concretas. La Corte Constitucional ha sostenido que la libertad de elección no es absoluta<sup>11</sup>. El legislador puede imponer límites a ésta, a fin de evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros<sup>12</sup>.  
Negritas y subraya fuera del texto original.

Luego, al no obrar en los autos prueba de la *asesoría clara, completa, objetiva e integral que se afirma en el escrito de contestación*, omisión que no se sana con una reasesoría como la que se trae, pues,

<sup>5</sup> C. Sup. Jus., SL 2817-2019, p. 17.

<sup>6</sup> C. Sup. Jus., SL 1688-2019.

<sup>7</sup> C. Sup. Jus., SL 2817-2019, p. 17.

<sup>8</sup> C. Sup. Jus., SL 1688-2019, p. 18: "Por tanto, la incursión en el mercado de las AFP no fue totalmente libre, pues aunque la ley les permitía lucrarse de su actividad, correlativamente les imponía un deber de servicio público, acorde a la inmensa responsabilidad social y empresarial que les asistía de dar a los usuarios la información necesaria para lograr la transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado".

<sup>9</sup> C. Sup. Jus., SL 19447-2019, p. 19.

<sup>10</sup> Véase, C. Sup. Jus., SL 19447-2019, p. 20.

<sup>11</sup> C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 1024 de 2004.

<sup>12</sup> C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 1024 de 2004.

*...la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información. Ver, entre otras, sentencias SL1688-2019 y SL5704-2021.*

Acertada resulta la declaratoria de **ineficacia del acto de traslado** dispuesta por la primera instancia, caracterizada porque desde su nacimiento el acto carece de efectos jurídicos, siendo sus consecuencias idénticas a las de la nulidad – vuelta al estado anterior, explicándose por la Sala de Casación Laboral que en estos casos:

*... los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJSL1689-2019, CSJSL3464-2019, CSJSL4360-2019 entre otras).*

Posición que ha sido traída hasta la fecha, tal y como se puede evidenciar, entre otras, en la sentencia SL587 de 2021, SL3202 de 2021, SL4803-2021, SL4609-2021, SL587-2022, SL1055-2022, SL2929-2022, por lo que acogándose por esta instancia un argumento de autoridad y acatándose el precedente que en línea mayoritaria sostiene la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, no tienen prosperidad las explicaciones dadas por el juez de instancia tendientes a excluir de la orden de restitución **los porcentajes aplicados a seguros previsionales**, máxime cuando en sentencia de tutela radicado 59370 del 06 de mayo de 2020, la Sala de Casación Laboral exhorta a acatar el

precedente vertical, en aras de la garantía de los principios de seguridad jurídica e igualdad, pudiendo apartarse del mismo siempre y cuando se cumpla con una carga argumentativa transparente y suficiente,

*... mediante un proceso expreso de contra-argumentación que explique las razones del disenso, bien por: (i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto, (ii) cambios normativos, (iii) transformaciones sociales que obligan a dar una nueva mirada a determinada cuestión, o (iv) divergencias hermenéuticas fundadas en la prevalencia de mejores y más sólidos argumentos que permiten un desarrollo más amplio de los derechos, libertades y garantías constitucionales. Así, la posibilidad de separarse del precedente emanado de las corporaciones judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las razones de su desconsideración en el caso que se juzga (C-621-2015).*

Lo que guarda consonancia con el inciso 2º del artículo 7º del C. G. del P., sin que se superen en este caso tales presupuestos, sino que por el contrario la identidad fáctica de los casos ya analizados por la alta corporación es total frente al que se decide en esta ocasión, y sin que se haya operado un cambio normativo o transformaciones sociales que obliguen a nuevas consideraciones, razón por la que **se revoca parcialmente y adiciona el numeral 3º de la parte resolutive de la sentencia, para ordenar a la AFP Protección S.A., incluir dentro de las sumas a restituir a Colpensiones, el total del monto descontado por gastos de administración** (que en los términos del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, incluyen además de tal concepto, las primas de seguros y reaseguros al igual que el porcentaje destinado a garantía de pensión mínima), **valores que deberán ser reintegrados dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, punto en el que se adiciona la sentencia.**

Cabe agregar que en atención a la modificación efectuada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (**ver entre otras, sentencias SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021, SL587-2022 y SL1055-2022**), precedente

resulta, **en grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones**, ordenar la **indexación de los rubros correspondientes a gastos de administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima**, valores que deberá asumir la administradora con cargo a sus propios recursos.

Se indicará igualmente que, al momento de cumplirse la orden impartida, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Sin costas en esta instancia ante la prosperidad del recurso de apelación.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca parcialmente y adiciona el numeral tercero de la sentencia revisada por apelación y consulta**, dentro del proceso promovido por **Luis Eduardo Bojaca González**, en contra de la **AFP Protección y Colpensiones**, para para indicar que la **AFP Protección, debe restituir a Colpensiones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión**, la totalidad de los aportes efectuados por el demandante durante la vigencia de su vinculación, con los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, sin descuento alguno por gastos de administración (que en los términos del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, incluyen además de tal concepto, las primas de seguros y reaseguros al igual que el porcentaje destinado a garantía de pensión mínima), este último rubro, **gastos de administración debidamente indexado**, con cargo a sus propios recursos. Al momento de cumplirse la orden impartida, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores,

junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. **En lo demás confirma.**

Sin costas en esta instancia ante la prosperidad del recurso de apelación.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijará por **secretaría por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Auto AL2550-2021.

**Los magistrados** (firmas escaneadas)

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL**  
Magistrada

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado